

Artículo 9

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

No existen precedentes en la historia constitucional española con igual o similar relación. En el derecho comparado, sin embargo, si encontramos parecidos con la legislación alemana. Lo que se establece en el artículo 9 es un requisito esencial de todo Estado de Derecho, que consiste en el sometimiento de los ciudadanos y, especialmente, de los poderes públicos, al Derecho. La Constitución es nuestra norma suprema y no una mera declaración programática. Se reconocen, además, los principios básicos de libertad, igualdad y derecho a la participación política, ya anteriormente recogidos en la Constitución de 1931; también se fijan los principios de nuestro ordenamiento jurídico (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, etc.), cuyos precedentes nos retrotraen hasta la Constitución de 1812 (La Pepa).

Todo ciudadano e institución debería obedecer a la Constitución, pero no es así y en muchas ocasiones queda sin penalizar su cumplimiento. Todos los días, en los telediarios escuchamos cómo se cometen, por ejemplo delitos de corrupción y fraude fiscal. Además, en ocasiones el principio básico de separación de poderes no siempre se respeta. Un ejemplo reciente es el de las tarjetas *black o*, también, la falta de ejemplaridad mostrada por numerosos políticos con la obtención de másteres falsos en la Universidad Rey Juan Carlos.

Vivimos en un país donde se están acentuando los problemas de exclusión social y es necesario articular más recursos para su socorro e inclusión social. Con todo, la Constitución española es un documento que sigue siendo funcional y debe ser respetada como nuestra norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.

Alberto F., María M., Eva J., Aroa J. y Hernán L. (3º ESO A)